

■ Elecciones y Pacto

■ Inseguridad y autoritarismo

**R**icardo Garibay ha descrito la política como "eso que sucede entre los políticos". Así parece creerlo la mayor parte de los ciudadanos, que no toma como asunto suyo la participación electoral. Aunque sea fenómeno universal, no puede despreocuparnos el abstencionismo que en las elecciones de Coahuila, Hidalgo y México ha sido una de las notas dominantes. En sistemas

■ 4

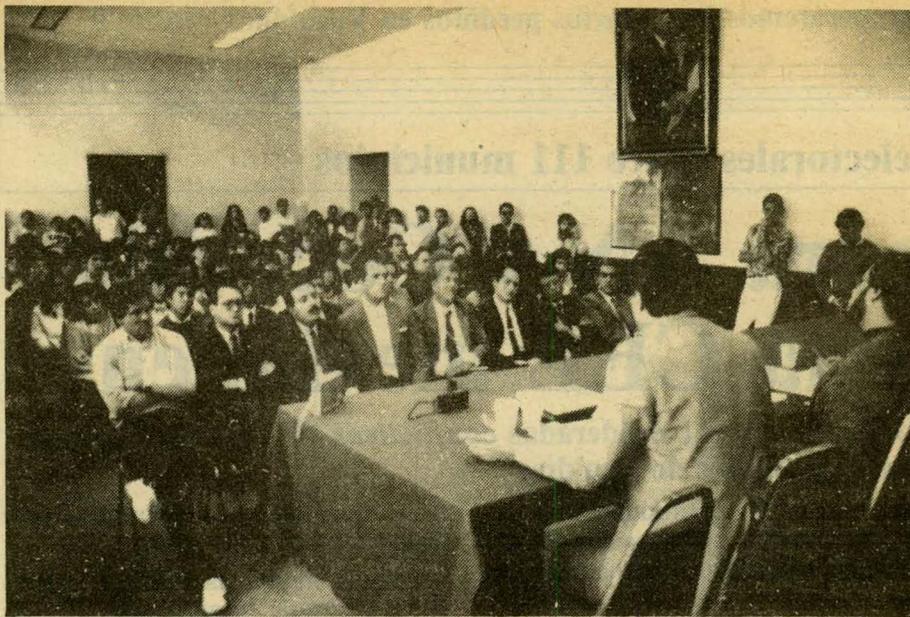
tivo, es decir, de inexistencia, y por ello es huido a la atención analítica. Pero es posible conjeturar que la dominación de un partido por largo tiempo y con fuerza avasalladora es uno de los factores que explica la abstención electoral. Se comprende que ciudadanos que han ido a las urnas en repetidas oportunidades a sufragar contra el PRI, o en favor de otras alternativas, se fatiguen cuando comprueban la ineficacia de su voto. De allí que las trapacerías electorales tengan a menudo doble efecto. No sólo inducen en lo inmediato un resultado electoral, sino que vacunan contra la participación.

La ausencia electoral de los ciudadanos es favorable al partido gubernamental. Los votos que consigue por clientelismo, inercia, intimidación, conveniencia o convicción, sólo pueden ser superados mediante una votación amplia, de sufragantes nuevos, ya sea por su edad o porque hallen en las elecciones un instrumento de participación o por lo menos de calificación al poder. Pero, naturalmente, no se trata sólo de un problema de difusión publicitaria o informativa, destinado a hacer que los ciudadanos se empadronen y acudan a las urnas. El asunto es más profundo, pues se requiere vencer las inclinaciones negativas al solipsismo, al descreimiento y aun al miedo.

El desprestigio de los políticos y los partidos cuenta entre las causas del ausentismo electoral. Quienes fueron hace tres años a votar, en Naucalpan o en Saltillo por alcaldes que ahora están bajo proceso penal por corrupción, requieren un ánimo sólido para no enfadarse con los temas electorales. Los fundados alegatos de la oposición contra preparativos fraudulentos, siendo necesarios para impedir o castigar el dolo electoral, provocan sin embargo desazón y alejamiento entre los votantes.

Pero vengamos a los casos concretos, los de la elección local de hace una semana en Hidalgo y México. En esta última entidad, sobre todo, coexisten dos versiones contradictorias, encontradas, de lo ocurrido el domingo. El triunfalismo priísta practica de nuevo la política del *carro completo*. Simétricamente, la oposición descalifica el proceso completo y hasta llega a solicitar la anulación de todos los comicios. A esas visiones globalizadoras se oponen los datos específicos, que muestran que el PRI ganó a la mala y que la oposición no pudo conseguir avances importantes por sí misma.

El examen de la situación mexiquense requiere tener en cuenta su complejidad.



Durante la clausura del curso del Colegio Nacional de Licenciados y Posgraduados en Ciencia Política ■ Foto: Arturo Guerra

No es buen método para el análisis admitir candorosamente los resultados oficiales, ni sólo tener por ciertas a las denuncias opositoras. La indignación de los ciudadanos y aun de los observadores por comportamientos ilegales y aun brutales, debe tener un lugar en el fenómeno y ser expresada. Lo peor que pudiera ocurrir es que además del atropello, fuera obligatorio sufrirlo en silencio. También debe tener un espacio la defensa priísta de sus cifras. No se trata de incurrir en un relativismo paralizante, de dar a todos la razón; pero algo de verdad hay en sus manifestaciones aunque no en iguales dosis. Al gobierno y al partido en el poder corresponde una responsabilidad mayor. No se les puede juzgar en paridad de circunstancias con el resto de los protagonistas del proceso electoral. Pero tampoco es dable ignorar o simplemente descalificar sus planteamientos.

No cabe duda que abundaron las irregularidades graves y que ellas no pueden ser condonadas. Hay evidencia de manipulación en el padrón, de urnas robadas, de brigadas volantes. Cualquiera que haya sido su importancia numérica, su impacto en los resultados, deben ser exhibidas y condenadas. Nos mantienen en la barbarie electoral, en la premodernidad. Provocan una peligrosa cólera en los ciudadanos. Y todo eso es responsabilidad gubernamental, sea por acción o por omisión.

El síndrome de inseguridad que padece el PRI lo condujo a excesos. Se había esforzado, aun antes de la campaña electoral, por recuperar terreno. El llamado de atención de 1988 fue eficaz, y el partido oficial buscó deliberadamente evitar que ese resultado se repitiera. Desplegó para ello toda suerte de recursos. Colocó en el mando político de la entidad a un gobernador activista, que ha pasado un año entero en permanente acción itinerante. Es seguro que el descuido de la base priísta haya estado entre las causas del decaimiento de ese partido, y esa incuria se corrigió. Se intensificó el clientelismo, es decir la atribución partidista de acciones gubernamentales, aunque sea menos comprobable que se discriminó a los beneficiarios de programas de política social en vista de su afiliación política. Aun si no se hubiesen practicado las normas contenidas en el famoso memo-

rándum del gobernador Pichardo Pagaza, la identificación entre las acciones del Programa Nacional de Solidaridad y el PRI se produjo efectivamente, con provecho para ese partido. Finalmente, aun con todas sus irregularidades, la principal de las cuales es la falta de un padrón priísta adecuado, la consulta directa a las bases fue un procedimiento pertinente para la selección de candidaturas. No se evita a través de ese medio la manipulación ni las imposiciones, pero se abre un margen para la real participación de los priístas, que los hay.

Todo eso hubiera debido inculcar en el PRI la convicción de sus posibilidades de triunfo. Si a ello se añade que cuenta con abundantes recursos materiales, los propios por ser el partido con mayor financiamiento abierto y legítimo, y los que el Estado le allega todavía; y si a eso se agrega la pulverización de la oposición, que en algunos municipios presentó hasta siete candidatos, se verá que el partido del gobierno hubiera podido entrar, con donaire, en una verdadera contienda. Pero su ansia por incrementar al máximo los márgenes de seguridad, lo condujo a la práctica de acciones fraudulentas, tan negativas como probablemente innecesarias.

También afecta gravemente al PRI su carácter autoritario. Como no ha sido un partido estrictamente hablando, en que la participación y la militancia modelen las conductas de la dirigencia, ésta se ha habituado a imponer sus determinaciones, frente a la oposición y aun en el seno del partido mismo, a cualquier costo, tope donde tope. Veamos, para ilustrarlo, dos casos en Hidalgo.

En Calnali, municipio serrano, al noroeste de la entidad, no hubo votación, y sin embargo a estas horas debe estar efectuándose el cómputo de sufragios que fueron colocados ilegalmente en las urnas, si acaso se llegó a esa formalidad ritual, no por los ciudadanos sino por funcionarios priístas. Aunque hay candidatos de la oposición, el principal obstáculo del partido oficial fueron sus propios integrantes, que estuvieron en desacuerdo con el resultado de la consulta directa. Aunque no se pasaron a otro partido, ni organizaron una candidatura independiente, los disidentes priístas se alertaron lo bastante como para impedir que se deformara por segunda vez su voluntad, esta vez en las

urnas constitucionales. Y cuando los representantes de la oposición fueron expulsados con violencia de las casillas, la gente resolvió no votar, y solicitar una nueva jornada electoral exenta de irregularidades. En poblaciones pequeñas como la propia cabecera de Calnali y con mayor razón en las comunidades aledañas, fue perfectamente comprobable que la elección no se llevó a cabo, por abstención activa de la población. Y sin embargo hoy será declarado triunfador un candidato por el que nadie votó.

En Santiago de Anaya, dentro del Valle del Mezquital, fue impuesto un candidato, hermano de quien hace tres años terminó con mala fama su periodo como alcalde. Se produjo por lo tanto una disidencia que no quiso, tampoco, irse a otro partido, ni abandonar su causa. Se formalizó una candidatura independiente, posible en la legislación y en las boletas hidalguenses. En un municipio con alto porcentaje de analfabetismo y de lengua hñahñú (otomí), hacer prosperar una postulación que requiere escribir el nombre del candidato en la papeleta no fue empresa fácil. Y sin embargo, era tal la inconformidad causada por la candidatura oficial, que el entusiasmo independentista cundió, al grado de que en la víspera de la elección el PRI pretendía una negociación, ya imposible a esa hora. El partido había llegado a la conclusión de que perdería, en vista de la penetración de la campaña disidente y el rechazo a su propio candidato, rechazo que llegó a tener ribetes graciosos, como un mitin de burros en Patria Nueva, uno de los poblados del municipio, que se reeditará hoy como protesta contra la maniobra que se buscará concluir. Hace una semana, en la jornada electoral, cuando el escrutinio en las casillas mostró una derrota apabullante del aspirante priísta, funcionarios del partido se robaron casi la mitad de las casillas, que depositaron en el comité municipal, previo ocultamiento bastante para manipularlas. Será así notorio que en las urnas cuyo robo fue denunciado, el PRI remontará la desventaja que sufrió en las mesas que pudieron ser escrutadas con normalidad.

Esas son anécdotas, se dirá. No lo son para la vida cotidiana de quienes padecerán durante un periodo prolongado los efectos de una imposición electoral, agravada por el recurso a la violencia o a la intimidación para hacer valer los resultados. Mientras las elecciones sigan siendo una fuente de conflicto en vez de ser el modo regular de integrar los gobiernos, la modernización política será quimérica.

Pero no sólo ante las urnas estamos en edades prehistóricas. La misma noche de ese domingo electoral, se anunció la quinta fase del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Esta vez el refrán de origen taurino no se cumplió: sí hay quinto malo. Aun sus términos expresos, pero con mayor razón sus implicaciones, hacen de la nueva versión del PECE un programa que lesiona a la mayor parte de la población, de modo a la vez grave e irremediable. Y es en la juntura del Pacto con las elecciones donde cobran fuerza los argumentos de la oposición sobre el fraude electoral, pues resulta incomprensible que los ciudadanos voten tan acríticamente en favor de quienes los perjudican.